

**SOLUCIONES SUPUESTOS PRÁCTICOS:**

 **1º SUPUESTO PRÁCTICO:**

**CASO PRACTICO Nº 1**

El Ayuntamiento de Alcuéscar quiere aprobar una ordenanza de convivencia ciudadana y buen gobierno. Para ello, previa consulta pública se elaboró un proyecto de ordenanza y se formuló propuesta de acuerdo por parte de la Alcaldía, para su sometimiento al Pleno.

Cuestiones:

a) ¿Qué mayoría es necesaria para la aprobación inicial de dicha ordenanza? ¿Cómo se sabe si se ha alcanzado dicha mayoría?

Mayoría simple de los miembros presentes, es decir mayor número de votos afirmativos que negativos. Artículo 47.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 99.1 del Real Decreto 2568/1986, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

b) Una vez aprobado inicialmente por el Pleno, se somete a información pública y audiencia de los interesados mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. ¿Cuál es el plazo mínimo de información pública y cuándo finalizaría ese plazo si la publicación en el BOP se lleva a cabo el día 3 de febrero de 2023?





El plazo mínimo de información pública sería de 30 días (hábiles). Artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El último día del plazo de información pública sería el 20 de marzo de 2023.

c) En caso de que durante el plazo de información pública no se presentaran reclamaciones ni sugerencias a la ordenanza de convivencia ciudadana y de buen gobierno aprobada inicialmente, ¿cómo deberá actuar el ayuntamiento para que la ordenanza entre en vigor?

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Para que la ordenanza entre en vigor será necesario publicarla íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor cuando transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 LRBRL (15 días hábiles). Artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 **2º SUPUESTO PRÁCTICO:**

**CASO PRACTICO Nº 2**

La Alcaldía del Ayuntamiento de Alcuescar ha dictado en fecha 14 de mayo de 2023 resolución de desestimación de la solicitud de vallado de una calle, realizada por una vecina. El texto de la resolución determina que se notifique a la interesada la resolución dictada.

¿Qué elementos deberá contener la notificación de la resolución?

Deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿En qué plazo deberá realizarse dicha notificación?

Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días (hábiles) a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si la notificación de la resolución se realizara en papel en el domicilio de la interesada y en el momento de llegar el notificador sólo se encontrara en la vivienda el hijo menor de edad de la vecina solicitante, ¿cómo debería actuar el notificador?

Si el hijo de la solicitante tiene 14 o más años podrá recibir la notificación haciendo constar su identidad. Si es menor de 14 años no podrá recibir la notificación, debiéndose dejar constancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, e intentar la notificación una vez más dentro de los tres días (hábiles) siguientes, en una hora distinta. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Además, todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica del ayuntamiento para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Artículo 42 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si ni en el primer intento de notificación ni en el segundo se hubiera podido practicar dicha notificación (notificación infructuosa), ¿cómo debe actuar el ayuntamiento?

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, previamente y con carácter facultativo, el ayuntamiento podrá publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente. Artículo 44 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si la interesada no está de acuerdo con el contenido de la resolución dictada, ¿Qué recursos podría interponer tanto en vía administrativa, como en vía judicial? (NOTA: recursos a citar en el pie de recurso)

Como norma general, los recursos que podría interponer y que se citarían en el pie de recurso serían los siguientes:

- En vía administrativa, el recurso potestativo de reposición.

 - En vía judicial, el recurso contencioso-administrativo.

Todo ello sin perjuicio de que pudiera interponer cualquier otro que estime pertinente.

 **3º SUPUESTO RPÁCTICO:**

**CASO PRACTICO Nº 3**

Este Ayuntamiento quiere adjudicar mediante contrato menor de obras las obras de REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL.

Según el proyecto de obras que consta en el expediente aparecen los siguientes datos: “El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto asciende a la cantidad de 33.613,43 Euros, que incrementado en el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial da un Presupuesto Base antes de Impuestos de 39.999,99 Euros, y a todo ello se le añade el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), nos da un Presupuesto Total de Licitación de 48.399,99 €.”

 “El plazo de ejecución de las obras es de 5 meses. Prórroga NO”.

¿Es posible adjudicar el contrato a través de la figura del contrato menor? Justifique su respuesta.

Los contratos menores, de acuerdo con el apartado 8 del artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Asimismo, el artículo 118 de la LCSP, establece un límite cuantitativo en relación a los contratos menores de obras: «1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal».

Éstas son las dos características fundamentales de los contratos menores de obra, no podrán tener una duración superior a un año y tendrán que tener un valor estimado inferior a 40.000 euros.

En cuanto a la diferencia del valor estimado del contrato con el presupuesto base de licitación del mismo, debemos atender a lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la LCSP. Así, el artículo 100.1 de la LCSP indica lo siguiente respecto al presupuesto base de licitación:

«A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario».

Y, por otro lado, el artículo 101.1 de la LCSP establece que el valor estimado de los contratos será determinado como sigue:

«a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios».

Si el valor estimado del contrato es menor a 40.000 euros y la duración del contrato no es superior a un año la tramitación podría hacerse por contrato menor.

 Si el valor estimado de la obra es de 39.999,99 euros o inferior (IVA excluido), puede adjudicarse dicho contrato mediante un contrato menor de obra, siempre que la duración del contrato no fuera superior a un año.

**4º SUPUESTO PRÁCTICO:**

**CASO PRACTICO Nº 4**

Un ciudadano presenta instancia en el registro de entrada, en la que reclama al Ayuntamiento de Alcuéscar una indemnización por responsabilidad patrimonial, alegando que el movimiento de un contenedor ha causado daños a su vehículo, estacionado junto al mismo. La instancia presentada no reúne los requisitos señalados en el artículo 67.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones Públicas para la iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial (lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba).

Cuestiones:

1. ¿Cómo deberá actuar el ayuntamiento ante tal solicitud incompleta? ¿Qué plazo se concederá al interesado?

El ayuntamiento requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días (hábiles), subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. En caso de que el interesado no presente en el plazo concedido la documentación necesaria para tramitar el expediente derivado de su solicitud ¿se podrá cerrar el expediente sin más trámite o será necesario realizar algún otro trámite?

La terminación del procedimiento se producirá en este caso por desistimiento, para lo cual deberá dictarse resolución por la Alcaldía y notificarla al interesado. Artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) En caso de que el interesado sí que presente la documentación necesaria, pero transcurran seis meses más sin haber recaído resolución sobre dicho procedimiento ni haber recibido notificación alguna del ayuntamiento, ¿qué sentido tendrá el silencio administrativo?

El silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad de las administraciones públicas iniciados a solicitud de interesado, siendo por tanto contrario a la indemnización de particular. Artículos 24.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 91.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

**5º. SUPUESTO PRÁCTICO:**

**CASO PRACTICO Nº 5:**

Ha llegado al Ayuntamiento una subvención de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres por importe de 4.000 € para reforma de la Guardería Municipal.

¿Qué modificación presupuestaria habría que tramitar?.

¿Cuál es el órgano competente para la aprobación de la modificación?. Procedimiento a seguir.

Habría que tramitar un expediente de modificación de créditos en su modalidad de generación de créditos.

De acuerdo con el artículo 43.2 del Decreto 500/1990, el Pleno, a través de las bases de ejecución del Presupuesto, determinará la tramitación de estos expedientes y el órgano competente para su aprobación. Generalmente se atribuye la competencia a la Alcaldía, como órgano que tiene atribuido el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado (véase el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).

El procedimiento adecuado para llevarla a cabo es el siguiente:

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los *[que no existe consignación en el vigente Presupuesto de la Corporación/que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable]* se instó mediante providencia de Alcaldía la iniciación de un expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de generación de créditos.

Al expediente deberá incorporarse Memoria de Alcaldía, en la que se presentará la propuesta de modificación de créditos en la modalidad de generación de créditos.

Asimismo, de conformidad con los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emitirá informe por el órgano Interventor.

Posteriormente, se elaborará Informe sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Alcaldía está obligada a dar cuenta sucinta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria de la Resolución por la que se apruebe el expediente de generación de créditos, a los efectos del ejercicio por este de sus funciones de control y fiscalización.

Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.